

E

Editorial

Ataque de jauría: peligro en la calle

El caso de un niño agredido por 6 perros expone la urgente necesidad de fiscalizar la propiedad de animales en los sectores más vulnerables y tomas ilegales de Osorno.

El reciente ataque de una jauría de seis perros contra un menor de 13 años en la población Punta Gruesa, en el sector de Francke, ha dejado de ser un incidente aislado para convertirse en un síntoma alarmante de abandono y falta de control de mascotas en determinados sectores de Osorno. Las graves lesiones físicas del menor, que incluyeron suturas en brazos, glúteos y piernas, son la cara visible de un daño mucho más profundo: el trauma emocional y las crisis de pánico que hoy afectan su salud mental. Este caso debe ser el punto de inflexión para que la justicia y las autoridades municipales dejen de tratar estos episodios como simples accidentes fortuitos.

La proliferación de perros agresivos en las cercanías de tomas de terreno ilegales y sitios eriazos representa un peligro latente que los vecinos de calle Ancón ya habían advertido. No es aceptable que existan zonas de la ciudad donde el tránsito en bicicleta o a pie se convierta en una actividad de alto riesgo debido a la presencia de animales sin control. Si bien las campañas de esterilización son un paso necesario, resultan estériles si no van acompañadas de una aplicación rigurosa de la ley de tenencia responsable, que obligue a los dueños a hacerse cargo del comportamiento de sus mascotas.

El hecho de que el Ministerio Público ya tenga los antecedentes en sus manos es una oportunidad para sentar un precedente. Los perros que atacaron al menor tienen dueños o cuidadores en los asentamientos cercanos, y es hacia ellos donde debe apuntar la responsabilidad legal. La impunidad en estos casos sólo fomenta que el problema siga creciendo, transformando áreas residenciales en territorios donde impera la ley de la jauría.

Osorno no puede esperar a que ocurra una tragedia mayor o un desenlace fatal para actuar con la mano dura que hoy exigen las organizaciones protectoras de animales y la comunidad en general. La seguridad pública también implica el derecho a circular por las calles sin el temor de ser víctimas de una violación animal que, en última instancia, siempre es responsabilidad de un ser humano negligente.